

En 1973 la mayor parte de la energía de Francia provenía del exterior y su generación eléctrica dependía de las importaciones de petróleo y carbón. Fue en plena crisis del petróleo cuando el entonces primer ministro Messmer lanzó un ambicioso plan con el objetivo de que Francia generase toda su electricidad a partir de la energía nuclear. Como España en la década de los 60, Francia ya había iniciado un programa nuclear como forma de diversificar y abaratar las importaciones de hidrocarburos, pero fue con el Plan Messmer y con la crisis de suministro de petróleo cuando se tomó la decisión de desarrollar masivamente la energía nuclear con el objetivo de lograr soberanía energética y reducir la dependencia de las energías fósiles importadas.

Gracias a la madurez política del país vecino y al liderazgo de los sucesivos gobiernos en el Eliseo, Francia logró situar la cuestión energética como una prioridad nacional para la industria y para su bienestar. Ese ejercicio de patriotismo y responsabilidad de la mayor parte de los partidos ha tenido como resultado el que hoy en día Francia se encuentre en una posición privilegiada respecto al resto de países europeos en materia energética con una capacidad masiva de generación independiente, barata y sin apenas producción de CO2.

Como Francia ayer, España se encuentra hoy en una encrucijada similar y debe tomar decisiones cruciales para su futuro energético. Al mismo tiempo que se conoce que el déficit energético de España ascendió a más de 50.000 millones de euros en 2022, o sea, un 5% del PIB, con problemas de suministro de gas y petróleo por la situación geopolítica mundial, el Gobierno ha lanzado una consulta pública sobre la revisión del llamado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (el nombre es ya en sí un error de concepto) en donde la cuestión de la soberanía energética no es apenas considerada y la prioridad de la política energética nacional es simple y llanamente el cumplimiento de los objetivos de emisiones de CO2 y el cierre progresivo de las centrales nucleares. Evidentemente, si se parte de unas malas premisas y se utiliza de una lógica errada fruto de un fanatismo ideológico, los resultados no pueden ser buenos: el PNIEC es otro plan irreal que confunde deseos con realidades y será de nuevo la garantía para que España consolide la falta de visión y la apuesta por la precariedad energética que se ha ido consolidando desde 1975.

Lo que nuestro país precisa no son eslóganes, consultas ni continuar las chapuzas que desde hace décadas han servido sólo para enriquecer a empresas energéticas. Nuestro país debe revertir radicalmente esta situación y, como hizo Francia, España ha de apostar por los recursos propios, su tecnología y sus empresas con el objetivo último de disponer de fuentes energéticas masivas y económicas. Esto, por supuesto incluye las fuentes renovables como la solar, eólica y también otras en fases experimentales como la mareomotriz o la geotérmica; pero sobre todo, también pasa por replicar la experiencia de Francia con la energía nuclear. España debe mantener los emplazamientos nucleares y repotenciarlos con tecnologías nuevas como los reactores modulares. La innovación en el sector energético junto a la mejora de la eficiencia a partir del autoconsumo o la cogeneración deben ser igualmente prioritarias para que se pueda reducir la dependencia externa.

Y por supuesto, España no debe renunciar a maximizar su potencial energético mediante la explotación de los recursos naturales propios como el gas de esquisto u otros yacimientos no convencionales de hidrocarburos que podrían suponer hasta 35.000 millones de euros en la balanza comercial y más de 260.000 puestos de trabajo en los sectores primario, secundario y terciario según el estudio de la consultora Deloitte. Esto choca de nuevo con el marco actual. Con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en 2021, España renunció a avanzar en la senda de la soberanía energética ya que se prohibió la realización de prospecciones geológicas en el territorio nacional y en las zonas marítimas. ¿Se imaginan ustedes a Noruega o a Arabia Saudí renunciando a unos recursos naturales que son una garantía de prosperidad y bienestar para la población?

Hemos perdido muchos años ya. Es indudable que el avance de la generación eléctrica renovable es notable tal y como lo muestran las cifras de producción energética, pero España no puede resignarse a seguir persistiendo en unas políticas que arrojan unos resultados mediocres priorizando criterios ambientales y olvidándose de que la disponibilidad energética es una cuestión crítica para el presente y el futuro del país. Es por ello por lo que se precisan fuentes propias, asequibles y que eviten la generación intermitente e impredecible como la eólica o la solar. Se ha de potenciar el almacenamiento de energía con tecnologías nuevas como las baterías de alta capacidad y con medios convencionales como la instalación de ciclos de bombeo en las presas.

En una muestra de oportunismo político, Macron anunció el año pasado que para disminuir la ya de por sí reducida exposición de Francia a las importaciones de gas ruso, se construirían seis centrales nucleares adicionales. En el caso español, lo que tenemos es justo lo contrario. Jamás se ha explicado desde el Gobierno y mucho menos desde las empresas cómo es posible que cuanto más generación renovable entra en funcionamiento, más cara es la factura eléctrica.

Es el momento de priorizar el interés de los españoles y de la economía del país. Persistir en el error de promover políticas inmaduras que confunden deseos con realidades provocará que la economía nacional y las generaciones venideras paguen un alto precio y sigamos teniendo la pesada losa de las importaciones energéticas en nuestra balanza de pagos. No debemos resignarnos a ello. Podemos seguir el ejemplo de Francia, de hace ya 50 años, y caminar hacia la soberanía energética, o podemos quedarnos atrás, atrapados en debates estériles mientras nuestras necesidades energéticas continúan sin resolverse. Es hora de cambiar el relato.